

Por Daniel Rozas

“Soy un académico universitario que ha hecho de la educación superior pública una vocación y un compromiso vital”, explica este porteño criado en la población Héroes del Mar del cerro Los Placeres.

Descendiente de una familia de clase media empobrecida, hijo de un trabajador de la empresa Esvay y de una dueña de casa, Osvaldo Corrales pertenece a la primera generación que cuenta con estudios avanzados y actualmente se desempeña como rector de la Universidad de Valparaíso para el período 2020-2024.

Con el próximo 26 de octubre como fecha límite para postular a la gratuidad en la educación superior —formula que abarca a jóvenes provenientes del 60% más vulnerable de la población con la posibilidad de estudiar en una institución universitaria o técnica— conversamos con este psicólogo y magister en Comunicación Social de la U. de Chile, para conocer su opinión sobre la propuesta presupuestaria del Gobierno en esta materia (que creció un 15% con respecto al año pasado).

Corrales, quien también es el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), sostiene que el aumento presupuestario propuesto por el Ejecutivo “va dirigido fundamentalmente a las nuevas instituciones que están haciendo ingreso a la gratuidad. Lo que aumenta en cobertura tiene que ver con el volumen importante de estudiantes que van a ingresar por primera vez el próximo año a la gratuidad”. Y añade: “Para el resto del sistema, el presupuesto en educación superior es más bien un presupuesto de continuidad”.

Exmilitante del Partido Socialista, dice que la educación pública debería contar con un sistema de financiamiento distinto al de la educación privada, ya que “el actual sistema de financiamiento a través del subsidio a la demanda no satisface las necesidades del país en cuanto a la educación superior”.

El también doctor en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, piensa que el sistema de financiamiento mediante el cual el Estado asigna recursos a los establecimientos según la cantidad de estudiantes que asistan o estén matriculados, es una anomalía. “En Chile, somos los únicos que financian las instituciones educativas a través de *vouchers*”.

“Nicolás Eyzaguirre sólo optó por intervenir los liceos subvencionados”

—Gabriela Mistral decía que “el peor maestro es el maestro con miedo”. ¿Por qué cree usted que en Chile hay escasez de profesores y los jóvenes no quieren estudiar pedagogías?

—Una razón es histórica y tiene que ver con las bajas remuneraciones para la profesión docente. Existe la percepción de que el trabajo de los profesores se traduce



FOTOGRAFÍA: CRISTOBAL BASAURE / ATON

Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado:

“El actual financiamiento hace que las universidades del Estado estemos privatizadas de facto”

El rector de la U. de Valparaíso dice que “no estamos abogando por que el Estado cubra el 100% de nuestras necesidades, pero en la actualidad, los aportes basales representan entre 15% al 18%”.

en largas jornadas y no está bien remunerado acorde al sacrificio que ellos realizan. Además hay condiciones laborales, en algunos casos, bastante precarias, con contratos que se extienden sólo por 10 meses y no son renovados. A ese factor se suma que, cada vez más, hay casos de profesores que son agredidos al interior de colegios. Tenemos casos de violencia hacia los profesores por parte de apoderados y estudiantes. Muchos docentes están desertando de la carrera de pedagogía porque tienen alternativas de empleos que pueden ser más atractivas a corto plazo. Y eso está perjudicando el desarrollo del país. Pero lo que no puede ocurrir es que

el país se quede sin profesores.

—¿Cuál es su reflexión acerca de lo que ocurre en los liceos emblemáticos?

—Hay una situación endémica de abandono en el sistema de educación pública y en los liceos emblemáticos. Yo he tenido la oportunidad de recorrer distintos liceos y las condiciones son penosas. Un joven no puede sentir que el Estado lo trata bien cuando lo mantiene en condiciones síquicas y ambientales tan deprimentes.

Osvaldo Corrales dice que las escuelas públicas han dejado de ser lugares de integración social y se han convertido en establecimientos precarios destinados principalmente a personas con bajos in-

gresos. “Y eso aumenta la sensación de abandono de los jóvenes que acceden a la educación pública. No tienen las mismas oportunidades para ingresar a la educación superior y continuar sus estudios porque la calidad de educación que reciben es menor”.

En cuanto a los liceos emblemáticos, aunque no tiene un conocimiento detallado de su situación, plantea su preocupación ya que se ha “arraigado el uso y la legitimación de la violencia por parte de grupos pequeños”.

—El filósofo Max Colodro sostiene que “lo que estamos viviendo es un deterioro muy profundo de la educación pública desde hace mucho tiempo, debido a la influencia del movimiento estudiantil al menos desde el año 2011”. Agrega que ese daño se debe “a la violencia, las tomas, los paros prolongados y la destrucción de la convivencia escolar”. ¿Cuál es su opinión?

—A mí me parece que uno no tiene que confundir los síntomas con las causas basales. Y comprender un fenómeno no equivale justificarlo. Yo no justifico ninguna forma de violencia, pero me acerco a los problemas con un enfoque comprensivo para tratar de entenderlos.

—¿Usted dice que pensar el deterioro de la educación pública sólo desde la violencia al interior de los colegios es una simplificación?

—Piense que durante mucho tiempo se invertía alrededor de 30 mil pesos mensuales por estudiante en los colegios municipalizados. Eso equivalía a más de mil pesos por estudiante diarios en su formación, en circunstancias que los colegios particulares podían invertir hasta 15 o 20 veces más. La calidad de la educación municipal que se estaba proveyendo con la idea del *voucher*, era financiada en función de la asistencia de los estudiantes. Es decir, si un estudiante no asistía al colegio, ese colegio era castigado y no recibía el financiamiento. Entonces tenemos una crisis que viene de mucho tiempo, con corporaciones municipales quebradas. Esto no excluye que tengamos una situación de violencia estructural muy importante en toda la sociedad que también se manifiesta en los colegios. Muchas familias no quieren matricular a sus hijos en los liceos emblemáticos porque se pierden clases y hay situaciones de violencia. La pregunta es cómo llegamos hasta aquí. Es fácil echarle la culpa a los grupos radicalizados.

—Después de más de 10 años de movimientos estudiantiles y tras la agenda de cambios que pretendía reducir las desigualdades educativas, impulsada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿cuál es su evaluación?

—Insuficiente. Los resultados están a la vista. En evaluaciones internacionales como la prueba PISA, Chile se encuentra entre los países con las mayores disparidades entre quienes tienen acceso a la educación privada y quienes asisten a la educación pública. La misma tendencia se observa en la PAES y el SIMCE. A mí me



Nos financiamos casi de la misma forma que las universidades privadas. Competimos por estudiantes, por la gratuidad y por fondos para investigación”.



En Chile, somos los únicos que financian las instituciones educativas a través de vouchers”.

parece que uno de los errores fundamentales ha sido la falta de intentos por revitalizar el sistema de educación pública. Recuerdo la última reforma durante el mandato de la expresidenta Bachelet, cuando el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, optó por intervenir los liceos subvencionados. Costó muchos recursos. Sin embargo, no se realizó un esfuerzo equivalente para fortalecer la educación pública en términos de infraestructura y personal docente.

“Tenemos una pérdida de 3.500 millones de pesos al año por la gratuidad”

—¿Cómo podría mejorarse la crisis financiera de las universidades públicas?

—La financiación de la educación pública debería basarse en aportes basales en lugar de subsidios a la demanda. Sin embargo, la implementación de la gratuidad conlleva algunos problemas importantes. El superintendente de Educación Superior ha señalado que el sistema enfrenta un estrés financiero debido a que la gratuidad cubre sólo la duración teórica de las carreras, es decir, cinco años o 10 semestres, pero pocos estudiantes logran completar sus estudios en ese período. Y no es porque sean flojos. Muchos de ellos trabajan mientras estudian, lo que lleva a la extensión de uno o dos años su período de formación. La gratuidad, en el caso de estos estudiantes, deja de financiar sus estudios a partir del décimo semestre.

—Y buena parte de esa diferencia la cubren las universidades.

—Parte del costo de la educación de esos jóvenes recae en las propias instituciones, que en el primer año solo pueden cobrar al estudiante la mitad del arancel, por lo que muchos de estos estudiantes tampoco pueden pagar esa mitad. Esto ha derivado en una disminución significativa de los ingresos de las instituciones, lo que se traduce en una pérdida de aproximadamente 3.500 millones de pesos al año en el caso de la Universidad de Valparaíso. No obstante, esta situación ha aquejado no solo a las universidades estatales, sino al sistema educativo en su conjunto.

—Usted ha dicho que “Chile debe ser uno de los pocos países donde las élites se alarman cuando se anuncia que se fortalecerá la educación pública”. ¿En qué radica ese miedo?

—Lo dije cuando comparecí ante el Consejo Constitucional en defensa de la iniciativa popular llamada «Educación Pública para Chile». Creo que existe una concepción equivocada al pensar que fortalecer la educación pública implica que todo debe ser estatal, que únicamente el Estado debe ser el proveedor de la educación, o que se limite la capacidad de las familias y los jóvenes para elegir dónde estudiar. Ninguna de estas suposiciones es correcta. Un sistema de educación pública sólido no impide que las familias tengan opciones. Más bien, ofrece a las personas una alternativa para que sus hijos puedan recibir una educación de calidad en un entorno que promueva el

pluralismo, el laicismo y otras características propias de los sistemas de educación pública. Además, beneficia a aquellos que no tienen otras opciones, permitiéndoles acceder a una educación de calidad equivalente a la que recibiría un estudiante en una escuela privada. La educación pública, además, favorece los procesos de integración social. Y Chile está viviendo un grave proceso de desintegración social. Probablemente el estallido fue una expresión de eso. Y eso ocurre porque que el proceso de segmentación de la educación básica y media provocó un problema de cohesión social. Es un error pensar que la educación pública se opone a la educación subvencionada o particular. Si Chile hubiera tenido un sistema de educación pública sólido que fomentara la integración de los diferentes sectores sociales, habríamos evitado gran parte de lo que experimentamos durante el estallido social.

—¿Las universidades públicas y estatales deben avanzar hacia un nuevo pacto con el Estado y sus instituciones?

—Tenemos que cambiar el pacto entre las universidades públicas y el Estado. Las universidades del Estado aumentamos el patrimonio público de un modo muy significativo; no obstante, el actual régimen de financiamiento hace que, en el fondo, las universidades del Estado estemos privatizadas de facto. Nosotros nos financiamos casi de la misma forma que las universidades privadas de nuevo cuño. Competimos por estudiantes, por la gratuidad de la educación y por fondos para investigación, a pesar de recibir proporcionalmente menos aportes basales en comparación con otras universidades. No estamos abogando por que el Estado cubra el 100% de nuestras necesidades presupuestarias, pero en la actualidad, los aportes basales representan aproximadamente del 15% al 18% de nuestro financiamiento total. Es necesario establecer un nuevo pacto en el cual el Estado proporcione aportes basales a nuestras instituciones para que puedan cumplir plenamente con sus funciones. A cambio, las universidades deben comprometerse a contribuir al desarrollo nacional, tanto en la formación de pregrado como en programas de posgrado, así como en el avance de las ciencias, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Es positivo que las instituciones privadas colaboren en estas áreas prioritarias, pero no es saludable dejar que estas prioridades estén completamente determinadas por las leyes del mercado.

—¿Cómo cree que quedó la nueva propuesta constitucional en materia de educación pública?

—A mí me parece muy insatisfactoria en principio. Es fundamental que una Constitución parta del principio de establecer un Estado social y democrático en el que el derecho a la educación pública quede debidamente consagrado y protegido en el texto. Desde mi punto de vista, el texto tal como está hoy, no garantiza que el Estado esté obligado a proporcionar acceso a la educación a través de un sistema de educación público.